



Todas estas muertes...

Hay historias nuevas y hay historias antiguas.

Casi inevitablemente, los servicios de seguridad se ven siempre

acosados por la duda y la sospecha. La base misma de su acción —el secreto— resulta difícil de conciliar con un anhelo universal de verdad y transparencia.

Este es, quizás, el primer punto que debemos abordar si queremos hacer un análisis —no diremos desapasionado, porque no puede serlo— de la increíble y abrumadora serie de muertes producida entre el mediodía del lunes 15 y la madrugada del martes 16 en Santiago. La versión oficial indica que las muertes, más algunas detenciones, se produjeron en “enfrentamientos”, lo que ha sido puesto en duda por testigos y vecinos. Y aunque nunca es fácil hablar del “país” o a nombre de “la opinión pública”, es evidente que esta vez hay demasiados sectores que coinciden en una petición básica de esclarecimiento, de una investigación “urgente y exhaustiva” de los hechos.

La Iglesia Católica, los colegios profesionales, los partidos políticos, diversas agrupaciones donde se conocía a las víctimas de lo que un obispo llamó una “matanza”, están de acuerdo en que la realidad del país, la cercanía del término de la etapa de transición y consiguientemente del articulado transitorio de la Constitución, pero sobre todo, un sentimiento de angustia, un convencimiento de que no habrá paz si no es sobre bases sólidas, obligan a una gran tarea de esclarecimiento.

No estamos en la nebulosa de los primeros meses del régimen militar. Tampoco en la época oscura de los detenidos-desaparecidos. No es el momento en que se pueda aceptar —como fue cómodo, por ejemplo, inmediatamente después del caso de la doctora británica Sheila Cassidy— como absoluta y tranquilizadora la verdad de los organismos oficiales. No lo era entonces. Parece difícil que lo sea ahora.

Por lo demás, desde la Ley de Amnistía y cada vez que el tema sale a la luz en las Naciones Unidas o en otros foros internacionales, se nos ha reiterado que hay una sustancial y apreciable mejoría en materia de derechos humanos. El mensaje oficial, igualmente reiterado, es que por razones políticas, los “enemigos” del régimen no quieren aceptar la realidad ni los avances de un país que, según esta visión, marcha sin tregua ni retrocesos hacia la plena normalidad.

Pero no es así.

La normalidad no debería incluir episodios como los que se comentan. Sin embargo, ellos ocurren, de vez en cuando, casi siempre muy excepcionalmente, tanto en democra-

cias sólidas y antiguas como en aquellos países que recién salen de los traumas de la dictadura y del poder discrecional. Pero en uno y otro caso, cuando la opinión pública clama por una explicación y a ella se suman autoridades morales y espirituales de todo signo, existe la voluntad y la capacidad de buscar la verdad y darla a conocer.

Es lo que los chilenos están pidiendo ahora.

Parece difícil, sin embargo, hacerse ilusiones. El brusco paso del “veranito” de Juan Pablo II al gélido y brutal invierno que representan estas muertes es aplastante y desanimador.

Vuelven las peores dudas acerca de la voluntad real de llevar el país a la plenitud democrática, más allá de la lentitud exasperante con que se maneja el proceso. Vuelve, también, la desoladora convicción de que el capitán general Augusto Pinochet se mueve mejor, más a gusto, en el terreno de la confrontación que en el campo de la negociación y de la transacción, que son en definitiva las bases de sustentación de toda democracia.

Ahora no está sólo en juego la credibilidad de un organismo de seguridad o lo que ocurrió en esas horas trágicas. Lo que se necesita, sin duda, es una reafirmación de la voluntad de avanzar a la plenitud democrática, sin apellidos ni reserva de espacios privilegiados.

La prueba sería una explicación exacta de cómo ocurrieron los hechos, por qué fue necesario que se produjeran todas esas muertes, cómo se avala la tesis del enfrentamiento...

No basta con dar a conocer la militancia política o incluso el reconocimiento de que algunos de los abatidos estaban vinculados al Partido Comunista o al propio Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Esta es apenas una parte de la información que se está pidiendo.

Nos parece indispensable insistir en lo que es un convencimiento profundo en esta revista: nada puede reemplazar a la verdad. La sociedad chilena necesita, después de tantos dolores y angustias —que por cierto no comenzaron en la mañana del 11 de setiembre de 1973— recuperar la confianza en las autoridades y, por supuesto, en los organismos llamados de seguridad.

Ninguna razón de Estado, ningún secreto puede significar la impunidad si ha habido abuso de poder, como dicen los códigos, “violencia innecesaria”.

La tranquilidad del país lo exige. La verdadera seguridad nacional, también.

ABRAHAM SANTIBAÑEZ